

ECONOMÍA Y TRABAJO

Las pensiones encadenan dos años de ganancias de poder adquisitivo

Las prestaciones de los jubilados suben un 2% más que el coste de la vida

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid
Los precios se han pasado en rojo buena parte de 2020. El coronavirus ha rematado una inflación que ya llevaba débil mucho tiempo como consecuencia de una endeble recuperación de

la crisis financiera, al menos en un país con el historial español. Noviembre ha acabado con un IPC anual del -0,8, según el dato divulgado ayer por el INE. En los últimos 12 meses eso supone una caída media de precios del -0,2%.

Una consecuencia es que los pensionistas ganan poder adquisitivo ya que sus prestaciones han crecido un 0,9% este año. Esto se traduce en un saldo positivo para los jubilados de 1,1 puntos, que se añade a lo ganado en 2019.

Ya hace tres años que España encadenó la evolución de las pensiones a los precios. Aunque esa ligazón es parcial, como ya sucedía antes de que se rompiera ese vínculo en 2013. Sirve para asegurarse de que no pierden poder adquisitivo; suelen ganarlo. Y eso es lo que sucedió en 2019 y ha vuelto a pasar en 2020. Los decretos de revalorización de las pensiones de sendos ejercicios establecen que para blindar el poder de compra de los jubilados se revisará si los precios crecen más a lo largo del año de lo que lo hicieron las pensiones en enero. Y para ello se toma como referencia la media del IPC anual entre diciembre de un año y noviembre del siguiente, este último dato es el que el INE divulgó ayer.

Desde que se volvieron a utilizar los precios como referencia para determinar la evolución de las pensiones, estas no han perdido poder adquisitivo. Tampoco con la criticada fórmula aprobada en 2013, ahora suspendida, lo perdieron todos los ejercicios. Entonces se vinculó la revalorización a la situación financiera de la Seguridad Social, muy precaria desde 2011. El resultado fue un aumento mínimo del 0,25% durante cinco años. Pero la inflación lleva tiempo aquejada de anemia y en algunos ejercicios los precios crecieron menos incluso.

Este mecanismo se suspendió hace tres años. En 2018 se hizo una ligera revisión al alza, porque los precios habían aumentado una décima más que las prestaciones. Al año siguiente ganaron nueve décimas de poder de compra, y este año serán 1,1 puntos. Es decir, la prestación de los pensionistas ha subido un 2% más que el coste de la vida.

Otros beneficiados

Además de los pensionistas, también los trabajadores públicos incrementarán su poder adquisitivo en 2020. En este caso el aumento será mayor incluso, ya que su aumento de sueldos fue del 2% y la referencia a tomar será el año natural. Según la previsión del IPC que Funcas ha hecho para todo 2020, los precios van a caer una media del -0,3%.

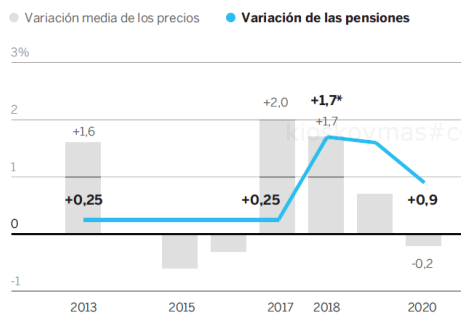
Impedir que las pensiones perdieran poder adquisitivo fue la principal demanda que aglutinó grandes movilizaciones de pensionistas en el invierno y la primavera de 2018. Aquellas manifestaciones masivas llevaron a suspender esa fórmula aprobada en 2013. El propio Pacto de Toledo acaba de manifestar su rechazo a ese mecanismo en su último informe de recomendaciones, que contó con un amplísimo res-



Un grupo de jubilados en Terrassa (Barcelona). / CRISTÓBAL CASTRO

La revalorización de las pensiones

Este año, las pensiones subirán un 0,9%, aunque los precios han caído un -0,2% entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020.



* En 2018, la subida inicial fue de 1,6, pero se compensó posteriormente para igualarla con el IPC.

Fuente: elaboración propia.

EL PAÍS

paldo en el Congreso hace unos días. Solo votó en contra de la CUP. Entre los que apoyó este informe estuvo el PP, el partido que estando en el Gobierno aprobó la fórmula suspendida: "El vigente mecanismo de revalorización de las pensiones no goza del suficiente consenso político y social".

En la misma recomendación, los diputados señalan que "la revalorización anual de las pensiones se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo". Y eso es precisamente uno de los puntos que

se negocian ahora en la mesa de diálogo social, que tuvo ayer una nueva reunión, y que tiene que dar forma a la próxima reforma de las pensiones.

La Seguridad Social todavía no ha concretado la propuesta en este punto. No obstante, en una entrevista reciente en EL PAÍS, el ministro del ramo, José Luis Escrivá, sugirió que baraja "ventanas de tiempo algo más largas" que un año para revisar si las prestaciones pierden poder de compra o no. Hacerlo durante más de un año da margen a la

Administración para compensar las ganancias de un año con las pérdidas de otro.

Si se hace así se evitaría el tremendo desgaste político que supondría pedir a los pensionistas que devolvieran parte de lo cobrado porque las pensiones subieron más que los precios. Y, de hecho, ningún Gobierno ha tratado de hacerlo. Antes de 2013, el mecanismo de revalorización era similar al actual y los Ejecutivos del PP y del PSOE que se vieron en una situación como la actual, nunca trataron de absorber las ganancias de poder adquisitivo.

La revalorización de las pensiones es uno de los elementos clave en la evolución del gasto de la Seguridad Social, junto con el número total de beneficiarios y la pensión media. Esto ha llevado a organismos como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) a proponer en diversas ocasiones a lo largo de los últimos años que la garantía de poder adquisitivo solo afecte a las pensiones mínimas.

Hay varias respuestas a estas posiciones. Una sería que la sociedad española no acepta la posibilidad de que las pensiones pierdan poder de compra, como demostraron las movilizaciones de 2018. Otra es que el sistema de pensiones español es contributivo y parte del principio de que el trabajador cotiza para cobrar una pensión futura que le garantice un nivel de vida; por tanto, permitir que la prestación pueda verse erosionada rompe ese principio.

Tres de cada cuatro autónomos han reducido la actividad

GORKA R. PÉREZ, Madrid

El colectivo de trabajadores autónomos vive con especial incertidumbre la evolución sanitaria y económica derivada de la pandemia. Así se desprende de las conclusiones del VIII Barómetro de Autónomos Covid-19 publicado ayer por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Tres de cada cuatro autónomos tienen actualmente alguna restricción en el desempeño de su actividad, y el 19,3%—620.000 de un total de 3.266.427 según el número de afiliados al RETA en octubre— tienen sus negocios y/o actividades cerradas actualmente. Como consecuencia de esta situación, entre aquellos que no pueden trabajar y quienes lo hacen con limitaciones, ATA estima que las pérdidas de este colectivo en el presente año serán de más de 60.000 millones de euros.

"Se avecina un desastre para autónomos, empresas y trabajadores si no se acompaña de un plan urgente de medidas económicas", asegura Lorenzo Amor, presidente de ATA. El estudio—compuesto a partir de las respuestas obtenidas a través de 2.040 cuestionarios— lanza otra alerta: el 84,9% de los autónomos asegura que la facturación de su negocio se ha reducido con respecto a 2019, siendo del 60% para la mitad de ellos. Solo el 9,7% declara haberse mantenido y un afortunado 3,2% ha logrado aumentar su recaudación.

El colchón de los ERTE

En cuanto a la cuantía de esas pérdidas, casi un millón (941.000, el 28,8%) las ha valorado en más de 30.000 euros, concentrándose este desgasto en los sectores más afectados por la pandemia: el de los eventos, ocio (infantil, nocturno, cultura y espectáculos) y el del comercio. "Se hace urgente establecer ya un plan de emergencia que prorrogue las ayudas hasta el 31 de mayo de 2021, facilite la liquidez e impulse el consumo y la demanda", incide Amor.

Como indica el estudio de ATA, el 44,8% de autónomos con trabajadores ha aplicado un ERTE o tiene previsto hacerlo para continuar con su actividad, mientras que el 23,4% reconoce haberse acogido a un expediente de regulación temporal de empleo para toda su plantilla. A pesar del esparanzador desarrollo de las vacunas, el horizonte para muchos autónomos sigue oscurecido. El 66,6% ve muy complicado recuperar a los trabajadores en ERTE y ante la perspectiva de un segundo confinamiento dos de cada tres dicen que no podrían soportarlo.